

RE: 76001310500620230055100- SERGIO EMILIO SARMIENTO BAUTISTA C.C. 19303057

Juzgado 06 Laboral Circuito - Valle del Cauca - Cali <j06lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mar 19/12/2023 2:18 PM

Para: Mejía y Abogados notificaciones - Colpensiones <notificacionssl@mejiayasociadosabogados.com>

Buenas Tardes

Cordial saludo

Acusamos el recibo de su mensaje.

Emi

Citadora



Dirección: Palacio de Justicia "Pedro Elías Serrano Abadía"

Carrera 10 No. 12-15 Piso 8 Cali

Teléfono: 6028986868 Extensiones 3062 y 3063

E - mail: j06lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

Micrositio: <https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-006-laboral-de-cali>

De: MEJIA YASOCIADOS ABOGADOS <notificacionssl@mejiayasociadosabogados.com>

Enviado: martes, 19 de diciembre de 2023 2:05 p. m.

Para: Juzgado 06 Laboral Circuito - Valle del Cauca - Cali <j06lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: subgerencia@mejiayasociadosabogados.com <subgerencia@mejiayasociadosabogados.com>; Mejía y Abogados Asociados gmail - Colpensiones <mya.acpensiones@gmail.com>; ldelgado@mejiayasociadosabogados.com <ldelgado@mejiayasociadosabogados.com>; delgadovalencialeonardo@gmail.com <delgadovalencialeonardo@gmail.com>; emilio.sarmiento@gmail.com <emilio.sarmiento@gmail.com>; Sol Angelica <procesos@tiradoescobar.com>; Buzon ProcesosJudiciales <procesosjudiciales@colfondos.com.co>

Asunto: 76001310500620230055100- SERGIO EMILIO SARMIENTO BAUTISTA C.C. 19303057

Señores

JUZGADO SEXTO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI

E. S. D

ASUNTO: CONTESTACION DE DEMANDA

REFERENCIA: ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA

DEMANDANTE: SERGIO EMILIO SARMIENTO BAUTISTA C.C. 19303057

RADICACION: 76001310500620230055100

De la manera más atenta, y dentro de los términos procesales oportunos nos permitimos remitir la contestación dentro del proceso de la referencia, junto con el poder de sustitución, copia de la escritura pública relacionado dentro del acervo probatorio del cuerpo de la contestación de la demanda.

Así mismo me permito indicar que, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 2213 del 2022, simultáneamente se efectuó envío de la contestación de la demanda con sus respectivas pruebas y anexos, a la dirección de correo electrónico indicada por la parte demandante en el libelo introductorio de demanda para efectos de notificaciones, esto es al correo electrónico del apoderado: procesos@tiradoescobar.com

El expediente administrativo se aportara una vez se allegado a esta oficina.

Solicitamos que a la vuelta de este correo nos acuse su recibido.

Respetuosamente,

HELLEN CAROLINA SALAZAR MOLANO
Coordinadora

✉ juridico4@mejiasociadosabogados.com

📍 Calle 5 Norte # 1N-95, Barrio Centenario
Oficinas Edificio Zapallar
Cali - Colombia

☎ 317 5012496 PBX: (602) 8889161

www.mejiasociadosabogados.com

MEJIA & ASOCIADOS
ABOGADOS ESPECIALIZADOS

Proud to be a
MEMBER OF IR GLOBAL
The world's largest exclusive professional
services network

GlobalLawExperts
Recommended Attorney

Este correo electrónico ha sido emitido desde un correo corporativo de Mejía y Asociados Abogados Especializados, por ello, tenga en cuenta que si dentro del contenido o anexos de esta comunicación se hace la recolección, traslado o uso de datos personales, los mismos deben ser tratados conforme a nuestra [Política de Tratamiento de datos Personales](#). Cualquier uso que no se circunscriba a las finalidades descritas en las políticas, o se realice sin el consentimiento previo de los titulares de la información está sujeto a las sanciones previstas para dicha infracción en la normatividad colombiana. Si considera que Usted no es destinatario de esta información, le pedimos notifique de manera inmediata al remitente y proceda a eliminar este mensaje de datos con sus anexos. La divulgación, distribución, copia o uso no autorizado podrá ser considerado como ilegal. La responsabilidad por los comentarios u opiniones contenidas en el correo o sus anexos es exclusiva de su remitente y no compromete o representa, necesariamente, a Mejía y Asociados Abogados Especializados.



Señora,
CLAUDIA LILIANA CORRAL CHAGUENDO
JUEZ SEXTA LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI
E. S. D

REFERENCIA: ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA
DEMANDANTE: SERGIO EMILIO SARMIENTO BAUTISTA CC 19303057
DEMANDADO: Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones y Colfondos pensiones y cesantías SA
RADICACIÓN: 76001310500620230055100
ASUNTO: PODER ESPECIAL

MARIA JULIANA MEJIA GIRALDO, identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.144.041.976 de Cali (Valle), en mi calidad de representante legal suplente de la firma **MEJIA Y ASOCIADOS ABOGADOS ESPECIALIZADOS S.A.S.**, bajo el NIT 805.017.300-1 sociedad con domicilio principal la ciudad de Cali constituida mediante escritura pública No. 1297 del 04 de julio de 2010 de la Notaria Cuarta (04) de Cali inscrita en cámara y comercio el 06 de julio de 2015 con el No 9038 del Libro IX y reformada mediante escritura pública 2082 del 08 de junio de 2015 de la Notaria cuarta (04) de Cali inscrita en cámara y comercio el 02 de julio de 2015 con el No. 9038 del libro IX, actuando en nombre y representación de la Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones para realizar las actuaciones necesarias para la defensa jurídica de esta Entidad dentro del proceso del asunto, mediante poder general otorgado mediante la escritura pública No. 3373 del 03 de septiembre de 2019 de la Notaria novena (09) del Círculo de Bogotá.

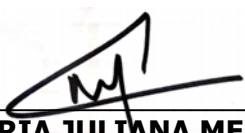
A su vez, manifiesto que a través del presente escrito SUSTITUYO poder al Doctor **LEONARDO DELGADO VALENCIA**, igualmente mayor y vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. **1.130.682.291 de Cali** y portador de la Tarjeta Profesional No. **233.481 del C.S.J.**, el apoderado queda revestido de las mismas facultades otorgadas a la suscrita, como el conciliar, transigir, desistir, sustituir, reasumir, renunciar a este poder y de las demás facultades que sean necesarias para el cumplimiento de este mandato, según lo establece el Art. 77 del C.G.P.

En consecuencia, sírvase reconocer personería al Doctor **LEONARDO DELGADO VALENCIA**, en los términos del presente mandato.

Renuncio a término de notificación y ejecutoria del auto favorable.

De Usted respetuosamente,

Acepto,


MARIA JULIANA MEJIA GIRALDO
C.C. No. 1.144.041.976 de Cali
T.P. No. 258.258 del C.S.J.


LEONARDO DELGADO VALENCIA
C.C. No. 1.130.682.291 de Cali
T.P. No. 233.481 del C.S.J.



Señora,
CLAUDIA LILIANA CORRAL CHAGUENDO
JUEZ SEXTA LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI
E. S. D

REFERENCIA: ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA
DEMANDANTE: SERGIO EMILIO SARMIENTO BAUTISTA CC 19303057
DEMANDADO: Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones y
Colfondos pensiones y cesantías SA
RADICACIÓN: 76001310500620230055100

ASUNTO: CONTESTACION DE DEMANDA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA

LEONARDO DELGADO VALENCIA, abogado en ejercicio, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, en mi calidad de apoderado sustituto de la Administradora Colombiana de Pensiones - en adelante COLPENSIONES -, cordialmente solicito al Despacho reconocerme personería para actuar de acuerdo al poder adjunto y estando dentro del término de la oportunidad procesal, de manera respetuosa me permito dar contestación a la demanda propuesta dentro del proceso de la referencia instaurado contra mi representada, para que mediante sentencia que haga tránsito a cosa juzgada se absuelva a mi representada de todas y cada una de las pretensiones propuestas en la demanda y se condene en costas a la parte demandante.

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD DEMANDADA, REPRESENTACIÓN LEGAL Y DOMICILIO

La Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES- es una empresa industrial y comercial del estado del orden nacional, organizada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio de Trabajo con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, cuyo objeto consiste en la administración estatal del régimen de prima media con prestación definida incluyendo la administración de los beneficios económicos periódicos de que trata el Acto Legislativo 01 de 2005 modificadorio del artículo 48 de la constitución Política, de acuerdo con lo que establezca la ley que los desarrolle. La representación legal la ejerce el Doctor **JAIME DUSSAN CALDERON**, o quien haga sus veces.

El domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., en la Carrera 10 No. 72-33 Torre B piso 11, número telefónico 2170100.

PRONUNCIAMIENTO EXPRESO FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA

AL PRIMERO: ES CIERTO, que el señor Sergio Emilio Sarmiento Bautista, nació el 03 de noviembre de 1955, a la fecha cuenta con 68 años.

AL SEGUNDO: ES CIERTO, que el demandante inició sus cotizaciones para los riesgos de IVM ante el instituto de seguros sociales de manera ininterrumpida y para diferentes empleadores a partir de agosto de 1979, logrando acumular en dicho fondo un total de 383 semanas cotizadas.

AL TERCERO: ES CIERTO, que el señor Sergio Emilio Sarmiento Bautista, fue trasladado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad RAIS, administrado por Colfondos.

AL CUARTO: NO ME CONSTA, que el traslado no se surtió en debida forma, pues el señor Sergio Emilio Sarmiento Bautista, no recibió por parte de Colfondos, la información que debe



proveerse al momento de ser afiliado o trasladado de régimen pensional. Es una situación ajena al radar operacional de Colpensiones.

AL QUINTO: NO ME CONSTA, que el señor Sergio Emilio Sarmiento Bautista actualmente tiene 68 años cumplidos y cuenta a la fecha tiene más de 1300 semanas cotizadas. Es una situación ajena al radar operacional de Colpensiones.

AL SEXTO: NO ME CONSTA, que al hacer el ejercicio de la liquidación de la pensión del actor como si se encontrara afiliado a Colpensiones, su mesada pensional sería de \$ 2.698.148,14. Es una situación ajena al radar operacional de Colpensiones.

AL SÉPTIMO: NO ES CIERTO, que si el actor, se pensionara por parte de la Colfondos pensiones y cesantías SA, generaría una grave afectación económica al demandante, puesto que vulneraría inclusive su mínimo vital, ello teniendo en cuenta que si el actor, hubiera continuado afiliado al instituto de seguros sociales hoy Colpensiones, su mesada pensional sería superior a la calculada por el fondo privado. En el sentido que Colpensiones no ha proyectado mesada pensional alguna.

AL OCTAVO: NO ME CONSTA, que si Colfondos AFP SA, hubiese entregado al actor los cálculos matemáticos y proyecciones necesarias, al momento de trasladarse, el actor no hubiera firmado el formulario de afiliación. Con lo que se puede concluir que la afiliación a estuvo viciada de error y por consiguiente es nula. Es una situación ajena al radar operacional de Colpensiones.

AL NOVENO: NO ME CONSTA, que el traslado realizado por el señor Sergio Emilio Sarmiento Bautista al fondo privado, no cumplió con los requisitos previstos para ello, pues evidentemente no se acredita por parte de la Colfondos pensiones y cesantías SA, que el consentimiento del actor hubiere sido no solo libre y espontáneo, sino debidamente informado sobre las consecuencias adversas del cambio de régimen, por lo que el traslado estuvo viciado de error y por consiguiente es nulo. Es una situación ajena al radar operacional de Colpensiones.

AL DECIMO: NO ME CONSTA, que el Señor Sergio Emilio Sarmiento Bautista, a través de abogado apoderado, procedió a solicitar ante la Colfondos pensiones y cesantías SA, el 14 de agosto 2023, toda la información referente su traslado, requiriendo, además, copia del formulario de afiliación, constancia de información del derecho de retractación, así como de los cálculos realizados a efectos de reconocer la prestación económica. Es una situación ajena al radar operacional de Colpensiones.

AL DECIMO PRIMERO: NO ME CONSTA, que la anterior solicitud fue contestada por la AFP el 18 de agosto 2023. Es una afirmación desconocida para Colpensiones, dada su naturaleza jurídica y operacional.

AL DECIMO SEGUNDO: NO ME CONSTA, que no existe prueba documental alguna tendiente a demostrar que, el Señor Sergio Emilio Sarmiento Bautista, se le hizo conocedor de las condiciones y consecuencias, tanto adversas como favorables, de trasladarse de régimen; razón por la que no puede tenerse por cumplida la obligación por parte de Colfondos pensiones y cesantías SA. Es una situación ajena al radar operacional de Colpensiones.

AL DÉCIMO TERCERO: NO ME CONSTA, que conforme lo anterior, también solicitó se declare la nulidad del traslado efectuado al Régimen de Ahorro Individual. Es una situación ajena al radar operacional de Colpensiones.

AL DÉCIMO CUARTO: NO ME CONSTA, que el actor cumplió sus 68 años el 3 de noviembre de 2023 y tiene más de 1300 semanas de cotización al 31 de junio de 2023. Es una situación ajena al radar operacional de Colpensiones.



AL DÉCIMO QUINTO: ES CIERTO, que el señor Sergio Emilio Sarmiento Bautista a través de apoderado, procedió a solicitar ante la Colpensiones el 10 de agosto de 2023, que se tuviera como nulo el traslado efectuado, del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad administrado por la AFP Protección SA. Pero se aprecia error en el sentido que la demandada es Colfondos mas no Protección SA.

AL DÉCIMO SEXTO: ES CIERTO, que la administradora colombiana de pensiones-Colpensiones a través de comunicación del 11 de agosto de 2023 determinó que no es posible acceder a la solicitud de declarar nula la afiliación, por cuanto el señor Sergio Emilio Sarmiento Bautista, quien haciendo uso de su libre elección de régimen pensional y en ejercicio de su capacidad legal, suscribió de manera voluntaria el formulario correspondiente a su traslado.

RAZONES Y FUNDAMENTOS DE DRECHO DE LA DEFENSA

NORMATIVIDAD APLICADA A LOS TRASLADOS ENTRE REGIMENES PENSIONALES EN CUANTO AL CASO EN ESTUDIO

El literal "b" del artículo 13 la Ley 100 de 1993, expresa: *"La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1o. del artículo 271 de la presente ley"*.

Por su parte, el literal "e", ibídem, establece: *"<aparte subrayado condicionalmente exequible><literal modificado por el artículo 2 de la ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> los afiliados al sistema general de pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez"*.

En el caso de estudio el señor Sergio Emilio Sarmiento Bautista, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19303057; nació el 03 de noviembre de 1955, razón por la cual a la fecha cuenta con 68 años de edad, es decir que acredita el cumplimiento de la edad para acceder al derecho a la pensión de vejez; inicio cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones del régimen de prima media con prestación definida administrado por el entonces ISS hoy Colpensiones, sin que medie las fechas exactas de afiliación y semanas cotizadas a dicha administradora, pero que en consulta del certificado de afiliación de la web de Colpensiones, se establece que el actor si estuvo afiliado y que su estado actual es trasladado a otro fondo. Link consulta de certificado [file:///C:/Users/U%20S%20E%20R/Downloads/Certificado afiliacion%20\(36\).pdf](file:///C:/Users/U%20S%20E%20R/Downloads/Certificado%20afiliacion%20(36).pdf)

Posteriormente el actor llevó a cabo traslado entre regímenes pensionales al régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por Colfondos SA pensiones y cesantías, suscribiendo formulario de traslado el día 17 de abril de 1995, con fecha de efectividad desde el 01 de junio de 1995. De conformidad con las normas en cita, el traslado a la fecha goza de plena validez y además de ello, el traslado de régimen es una potestad única y exclusiva del afiliado, sin que pueda trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez.

Valga señalar que el sistema pensional colombiano se divide en dos regímenes de diferente naturaleza: a). el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), y b). el Régimen de Prima Media (RPM). En el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad los aportes pensionales se depositan en una cuenta de ahorro individual a nombre de cada afiliado, es



decir, éste es dueño de su propia cuenta. Bajo este sistema, la pensión obligatoria se financia con los aportes efectuados por el afiliado y el empleador, más los rendimientos generados. Si el afiliado es trabajador independiente, los aportes los asume él en un 100%. En algunos casos, la pensión obligatoria también se nutre de los subsidios creados por la Ley, es el caso de la Garantía de Pensión Mínima.

Por su parte, en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida los aportes pensionales van a una 'bolsa común'; asimismo, la financiación de la pensión obligatoria cuenta con la garantía de un fondo común de naturaleza pública que se nutre de los aportes pensionales de sus afiliados. Cuando los afiliados se trasladan del Régimen de Prima Media al de Ahorro Individual, serán portadores de lo que se conoce como bono pensional.

Aunado a lo anterior, la demandante debe demostrar dentro del presente proceso jurídico la pérdida de un tránsito legislativo o la frustración de una expectativa legítima ocasionada por la decisión de afiliarse al Régimen de Ahorro Individual, toda vez que, de permanecer en Colfondos SA AFP, entidad en la cual se encuentra actualmente, conserva su posibilidad pensional, pues podría acceder al reconocimiento y pago de una Prestación Económica por Vejez.

De igual forma tampoco se demuestra vicio en el consentimiento o asalto a la buena fe en el momento en que se afilia al Régimen de Ahorro Individual administrado por Colfondos SA pensiones y cesantías, como se alega en la demanda, además para el momento de la afiliación era imposible predecir los Ingresos Base de Cotización sobre los cuales cotizaría la demandante en los próximos años y calcular una futura mesada pensional real en el momento de la afiliación, pues los ingresos económicos podrían variar en relación a los reportados en su Historia Laboral hasta esa fecha.

Vale la pena resaltar, además, que la afiliación de régimen es un acto libre y voluntario del afiliado y que las entidades administradoras no deben intervenir en la decisión del afiliado en lo concerniente a la elección del régimen pensional.

Ahora bien, no se puede tener como cierto que la falta de información se basó en que Colfondos SA pensiones y cesantías, no realizaron una proyección pensional a la demandante, al momento de su traslado, sin embargo, debe solicitarse al Despacho judicial se tenga en cuenta que las proyecciones pensionales no son pruebas útiles para demostrar un eventual vicio en el consentimiento al momento en que decidió su traslado dentro de las opciones que la ley le otorgaba.

Que la Corte Constitucional en la Sentencia SU 062 de 2010, señaló:

Es decir, aunque la Corte consideró acordes con la Constitución las disposiciones que prescriben que la protección de régimen de transición se extingue cuando la persona escoge el régimen de ahorro individual o se traslada a él, aclaró que las normas expresamente circunscriben tal consecuencia a sólo dos de los tres grupos de personas que ampara el régimen de transición: (i) mujeres mayores de treinta y cinco y (ii) los hombres mayores de cuarenta.

Por tanto, (iii) las personas que contaban con quince años de servicios cotizados para el 1 de abril de 1994 no pierden los beneficios del régimen de transición al escoger el régimen de ahorro individual o al trasladarse al mismo, lo que se traduce en que, una vez hecho el traslado al régimen de prima media, pueden adquirir su derecho pensional de acuerdo a las normas anteriores a la ley 100 de 1993.

Que el concepto del 4 de diciembre de 2014, indica lo siguiente:

"En la sentencia SU-130 de 2013, la Corte Constitucional reitera los criterios de traslado y recuperación de régimen de transición de aquellas personas que estando afiliadas al Régimen de Prima Media con Prestación Definida se trasladaron al Régimen de Ahorro Individual con



Solidaridad y quieren regresar el RPM, establecidos en las sentencias C- 789 de 2002, C-1024 de 2004 y 5U-062 de 2010, en cuante a:

- 1. Quienes eran beneficiarios de la transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 por acreditar el requisito de los 15 años de servicio o de cotizaciones a 01 de abril de 1994 pueden trasladarse de régimen en cualquier momento inclusive si les faltan menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión de vejez (literal e) del artículo 13 L 100/93). (...)*

Además, como quiera que el monto pensional en el RAIS también depende de variables como el rendimiento financiero de los fondos sujetos al comportamiento fluctuante de la economía, incierto resulta establecer un posible monto que le permitiera en ese momento a la demandante evaluar cuál sería a futuro el régimen más favorable, en esa medida, no se puede afirmar que el silencio de Colfondos SA pensiones y cesantías, en estos aspectos constituya falta en el deber de información.

Al respecto la Corte Constitucional ha manifestado en la Sentencia C-086 de 2002, Magistrado Ponente Clara Inés Vargas Hernández, que: *"para la Corte es claro que el sistema de Seguridad Social en pensiones no tiene por finalidad preservar el equilibrio cuota prestación sino la debida atención de las contingencias a las que están expuestas los afiliados y beneficiarios, además por que el régimen de prestaciones de la seguridad social en pensiones no es un régimen contractual como el de los seguros privados sino, todo lo contrario se trata de un régimen legal de una manera se asienta en el régimen contributivo en el que los empleadores y el estado participan junto a los trabajadores en los aportes que resultan determinantes en la cuantía de la Pensión. De ahí que los afiliados a la seguridad social no ostenten un derecho subjetivo a una cuantía determinada de las pensiones futuras, esto es, las pensiones respecto de las cuales no se ha producido el hecho que las causa"(...)*

No se demuestra entonces hasta el momento que la demandante haya sido engañada al tomar una decisión desfavorable a sus intereses, más aún, cuando ha permaneció en el Régimen de Ahorro Individual con solidaridad por muchos años, sin manifestar ninguna inconformidad respecto al desempeño y administración, afianzando su decisión de estar en este Régimen.

Por lo anterior, se tiene que la demandante se encuentra válidamente afiliado al Régimen de Ahorro Individual por decisión propia como lo demuestra su firma en el primer formulario de afiliación a Colfondos SA pensiones y cesantías, sin mostrar inconformidad alguna en la administración de sus cotizaciones en los Fondos privados referenciados.

En la Sentencia C-596 de 1997 la Corte Constitucional estudió una demanda dirigida contra la expresión *"al cual se encuentran afiliados"* contenida en el inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la cual se acusó de desconocer el principio de favorabilidad en materia laboral, colocar en situación desventajosa a las personas que se encontraban en el régimen de transición y violar el principio de irrenunciabilidad de los beneficios mínimos laborales, al respecto la Corte expresó:

"Justamente por cuanto los derechos a la seguridad social no se tienen por el simple hecho de ser persona humana, como si sucede con los derechos fundamentales o derechos de primera generación, para ser titular de ellos es necesario acreditar el cumplimiento de los requisitos que la ley, de manera general, impone para adquirirlos. Cuando, en vigencia de la ley que señala tales requisitos, estos llegan a cumplirse, se habla de derecho adquirido en materia de seguridad social. Cuando, por el contrario, durante el término de vigencia de la ley que prescribe tales condiciones, la persona que aspira a la titularidad de ellos está en vía de cumplirlas, se habla de expectativa de derecho. (...) Las consecuencias jurídicas en uno y otro supuesto son bien distintas: los derechos adquiridos, al tenor del artículo 58 la Carta Política, no pueden ser desconocidos por leyes posteriores; no así las simples expectativas de derecho." (Subrayado y negrilla fuera de texto original). Posteriormente, a través de la providencia C-789 de 2002, la Corte Constitucional resolvió la demanda presentada por un



ciudadano contra los incisos 4 y 5 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En la sentencia, la Corte precisó el alcance de derechos adquiridos y meras expectativas en materia pensional, indicando lo siguiente:

"La Sala Plena consideró que las disposiciones demandadas se ajustaban a la Constitución puesto que, en primer lugar, el derecho a obtener una pensión de acuerdo con el régimen de transición no es un derecho adquirido sino "apenas una expectativa legítima, a la cual decidieron renunciar voluntaria y autónomamente, para trasladarse al sistema de ahorro individual con solidaridad".

En segundo lugar, indicó que *ni siquiera puede afirmarse que las normas acusadas frustren tal expectativa ya que sólo "se podría hablar de una frustración de la expectativa a pensionarse en determinadas condiciones y de un desconocimiento del trabajo de quienes se trasladaron al sistema de ahorro individual, si la condición no se hubiera impuesto en la Ley 100 de 1993, sino en un tránsito legislativo posterior, y tales personas se hubieran trasladado antes del tránsito legislativo".*

Adicionalmente, las sentencias C-1024 de 2004, y SU-062 de 2010, de la Corte Constitucional en materia de traslados, indican que nadie puede resultar subsidiado a costa de los recursos ahorrados de manera obligatoria por los otros afiliados a este esquema, dado que el régimen solidario de prima media con prestación definida se descapitalizaría.

Así mismo, dentro de la aludida jurisprudencia la Corte recordó que *"el derecho a la libre elección entre los distintos regímenes pensionales previstos en la ley, no constituye un derecho absoluto, por el contrario, admite el señalamiento de algunas excepciones que, por su misma esencia, pueden conducir al establecimiento de una diversidad de trato".*

Como se observa, la Corte Constitucional destacó que el derecho a trasladarse NO es absoluto y debe atender criterios de sostenibilidad financiera y expectativas pensionales.

4.6. Desconocimiento del principio de sostenibilidad financiera del sistema general de pensiones - Art. 48 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005.

En desarrollo de los fines esenciales del Estado Colombiano, las instituciones que lo conforman deben propender hacia la salvaguarda de los principios y valores constitucionales conforme a lo dispuesto en la Carta Política, la Ley y los Convenios Internacionales suscritos por aquel.

El Artículo 48 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, señala:

"El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Las leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas." (Cursiva, Negrilla y Subrayado fuera del texto original).

Por consiguiente, el artículo 48 de la Constitución Política, estableció dos dimensiones de la seguridad social; por un lado, la concibió como un derecho constitucional fundamental; y, por el otro, como un servicio público de carácter obligatorio el cual se debe prestar bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en aras a la materialización de los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, entre otros.

El artículo 334 de la Constitución Política, señala que *"La sostenibilidad fiscal debe orientar a las Ramas y Órganos del Poder Público, dentro de sus competencias, en un marco de colaboración armónica"*, en ese orden de ideas, es necesario que, dando prevalencia al



interés general sobre el particular, se tomen las medidas pertinentes en búsqueda de la protección de los recursos que soportan el sistema pensional, conforme a los principios que rigen la Constitución Política, en la medida que el derecho a la seguridad social se encuentra atado al principio de sostenibilidad fiscal y estabilidad financiera del Estado. En consecuencia, la declaración injustificada de ineficacia del traslado de un afiliado del RPM a RAIS afecta la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones, y pone en peligro el derecho fundamental a la seguridad social de los demás afiliados.

En esta misma línea se pronuncia la Corte Constitucional en sentencia T- 489 de 2010, al expresar: (...) la Sala se permite destacar dos ideas, relacionadas ambas con la sostenibilidad económica del sistema pensional. Ellas son: a- La primera tiene que ver con la protección del capital pensional. No se puede permitir *"la descapitalización del fondo"*, si personas que no contribuyeron a su formación, vienen a último momento, cuando les faltan ya menos de 10 años para concretar su pensión de vejez, a beneficiarse de un ahorro comunitario accediendo a una pensión, cuyo pago desfinancia el sistema. b- En segundo término, desde una perspectiva social se contraría la equidad y se abandona el valor de la justicia material, al permitir a personas que no han contribuido a los rendimientos de los fondos pensionales, entren a beneficiarse y a subsidiarse a costa de las cotizaciones y los riesgos asumidos por otras y no por ellas mismas" (Subrayado y negrilla fuera de texto original).

Debe resaltarse la importancia que en este tema concede la Corte Constitucional a las consecuencias económicas de las diferentes posiciones sobre la sostenibilidad financiera del Sistema.

Así las cosas el principio de sostenibilidad financiera representa la garantía del derecho fundamental a la pensión de los Colombianos de manera sostenida e indefinida y la posición asumida por la Corte en los fallos relacionados con nulidad o inexistencia del traslado entre regímenes pensionales, quebranta el principio de sostenibilidad financiera, en tanto genera una situación caótica que desvertebra la debida planeación en la asignación y distribución de los recursos del Sistema Pensional, al desconocer la irreductible necesidad de que dichas condenas se cumplan previa la ordenada gestión de los recursos que en la mayoría de los casos no están presupuestados en la medida en que surgen, de manera contingente de la declaración judicial respectiva.

La estabilidad financiera se garantiza en la medida en que el sistema general de pensiones percibe y mantiene, a través de medios jurídicos y financieros, los fondos económicos adecuados que le permitan pagar mes a mes a una mayor cantidad de pensionados y obtener un ahorro para precaver la satisfacción de las pensiones futuras, bajo la permanente orientación de subsanar con urgencia cualquier desventaja contra el bienestar general.

No obstante, en el hipotético caso que el juzgador considere declarar la ineficacia del traslado de régimen pensional, pues hay lugar a reintegrar a la administradora colombiana de pensiones - Colpensiones la totalidad de la cotización, es decir: i) Recursos cuenta individual de ahorro, ii) Cuotas abonadas al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, iii) Rendimientos, iv) Anulación de Bonos Pensionales v). Porcentaje destinado al pago de Seguros Previsionales y gastos de administración, principio de sostenibilidad financiera: la financiación y la fiscalidad de la seguridad social La gestión de la seguridad social impone el que deba realizarse a través de una institucionalidad compleja, ordenada como sistema, entre cuyos elementos estructurales está el de los fondos económicos, con lo que se han de proveer los recursos indispensables para cubrir el costo de las prestaciones de protección a los afiliados. por lo tanto, es aconsejable revisar en cada caso lo que perjudicaría al sistema de pensiones. Lo anterior, en concordancia con la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, esto es, las sentencias CSJ SL1421-2019, CSJ SL17595-2017 y CSJ SL4989-2018, donde se rememoró la CSJ SL, 8 sep. 2008, rad. 31989, en la que se dijo:

"Sobre las consecuencias de la nulidad del traslado entre regímenes esta Sala en sentencia SL, del 8 de sep. 2008, rad. 31989, reiterada en varias oportunidades, adoctrino:
(...)



"La administradora tiene el deber de devolver al sistema todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación del actor, como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses como los dispone el artículo 1746 del CC, esto es, con los rendimientos que se hubieren causado.

"Como la nulidad fue conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del CC."

Igualmente, a luz de la jurisprudencia de la corte suprema de justicia en la sentencia SL 373 de 2021, este no puede retornar al régimen de prima media con prestación definida, en donde se prediga:

Para la Corte la respuesta es negativa, puesto que si bien esta Sala ha sostenido que por regla general cuando se declara la ineficacia de la afiliación es posible volver al mismo estado en que las cosas se hallarían de no haber existido el acto de traslado (vuelta al statu quo ante) 1, lo cierto es que la calidad de pensionado es una situación jurídica consolidada, un hecho consumado, un estatus jurídico, que no es razonable revertir o retrotraer, como ocurre en este caso. No se puede borrar la calidad de pensionado sin más, porque ello daría lugar a disfuncionalidades que afectaría a múltiples personas, entidades, actos, relaciones jurídicas, y por tanto derechos, obligaciones e intereses de terceros y del sistema en su conjunto. Basta con relevar algunas situaciones.

Sumado a lo anterior, se torna inviable la realización de los efectos de la ineficacia, por cuanto no es posible cesar los efectos jurídicos de las operaciones, contratos y actos que involucran a terceros como aseguradoras, entidades oficiales e inversiones, que según la modalidad pensional en que se encuentre el actual pensionado, hayan concurrido en la administración y gestión del riesgo financiero, entre otras muchas problemáticas de orden financiero, que ocasionarían un déficit económico entre los actores del Sistema que han confluído en la gestión de los recursos a través de relaciones jurídicas válidamente suscitadas en el mundo jurídico del Sistema General de Pensiones, en cumplimiento de obligaciones y deberes contractuales que ya se encuentran consumados y perfeccionados con las consecuencias de orden legal y financiero que ello acarrea.

Con fundamento en la sentencia SL 373-2021, se tiene entonces que no procede la declaratoria de ineficacia y/o nulidad de traslado de régimen pensional, en los casos en que la parte demandante se trate de una persona que ya se encuentre pensionada en el régimen de ahorro individual en cualquiera de sus modalidades o se adquiera el estatus de pensionado así no se encuentre percibiendo la pensión, motivo por el cual, solicito que de acreditarse dicho estatus de la actora.

Finalmente es preciso reiterar lo señalado en sede administrativa, toda vez que no resultaba procedente dar trámite al traslado de la demandante al régimen de prima media con prestación definida administrado por la administradora colombiana de pensiones Colpensiones, pues esta entidad no puede hacer otra cosa que ajustarse a los parámetros establecidos en las normas y en el presente caso aplica estrictamente la prohibición establecida en el Artículo 13. Literal "E" Literal modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003; tanto la negativa se dio con pleno fundamento en la aplicación rigurosa de la ley, pues a las administradoras les está vedado interpretar y determinar los alcances o efectos de la ley, ya que tal función de interpretar las normas sociales y ajustarlas a los postulados y objetivos fundamentales de la seguridad social, recae de manera exclusiva en el Juez.

INTERESES MORATORIOS



En lo referente a la pretensión del pago de los intereses del art. 141 de la ley 100 de 1993, estos no serán exigibles puesto que las contestaciones proferidas por Colpensiones a la actora se encuentran totalmente acordes a la normatividad, y en ningún momento se ha detectado actos irresponsables o contrarios a ley por parte de Colpensiones. A toda luz se aprecia que el régimen pensional aplicable a la actora es el consignado en la ley 71 de 1988 (pensión por aportes), por lo que se estaría en presencia en lo cobro de lo no debido.

Igualmente se tiene que en el presente caso no radica en la negativa al acceso de un derecho pensional, si no de un porcentaje que corresponde a una supuesta liquidación mal elaborada, pero que quedó demostrado se encuentra totalmente acorde a la normatividad, adicional que el porcentaje de dicha reliquidación es un derecho accesorio mas no principal, es decir el derecho centra ya fue otorgado debidamente, más lo perseguido por la actora es una pequeña parte del derecho principal. Sentencia SL 4754 de 2019, igualmente se nombran las sentencias SL 4338 de 2019, T-586 de 2012, C-601 de 2000.

La sentencia SL 770 de 2019, indica que en relación a lo pretendido por intereses moratorios el criterio mayoritario de la sala, no hay lugar a deducir condena alguna por este concepto en los términos art. 141 de la ley 100 de 1993, por cuanto, la pensión objeto de litigio no es de aquellas que se conceden con sujeción integra a la nueva ley de seguridad social, si no que corresponde a la señalada en el artículo 7 de la ley 71 de 1988, es decir dentro del presente caso no se viable jurídica ni fácticamente la aplicación de dicha figura.

Sin reconocer derecho alguno, la propongo para cualquier derecho no reclamado dentro de los tres (3) años posteriores a su exigibilidad, conforme lo dispone el art. 488 del CST y el art. 151 del CPL y por tenerse en cuenta que el fallador solo puede declarar esta excepción a petición de parte.

El artículo 151 del CPL establece: *"Prescripción. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se hizo exigible..."*.

Sobre la forma de contabilizar el término de prescripción, es menester recordar los fundamentos en que se sustentó la sentencia proferida por la sala de casación laboral de la C. S. J., el 5 de mayo de 2.006, Magistrado Ponente Dr. Luis Javier Osorio López que indicó:

"En materia laboral, la exigibilidad de un derecho empieza desde cuando el mismo se ha causado, es decir, cuando el beneficiario reúne los requisitos exigidos para acceder a él. Y es desde este momento cuando igualmente comienza a correr el término prescriptivo, como claramente lo señala el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, al igual que el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo e inclusive el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, que por un lapsus es citado por el Tribunal.

La prestación que trata el presente expediente no será susceptible de generar intereses moratorios, y se solicita se aplique lo estipulado por el art 141 de la ley 100 de 1993, adicionalmente se indica que existe una figura antagonista entre el pago de lo debido por concepto prestacional de manera indexada y la generación de intereses moratorios, por lo tanto, son excluyentes.

Que teniendo en cuenta que *"lo accesorio sigue la suerte de lo principal"*, es necesario precisar que en relación con la pretensión accesorio de reconocimiento de la Indexación, reajustes y pago de unos intereses de mora su estudio estaba condicionado al reconocimiento de la pretensión principal (reconocimiento de la mesada pensional) pero como ésta no prospero, es pertinente indicar que el debate sobre el punto anteriormente descrito resulta intrascendente.

En ese orden, es menester señalar que si bien es cierto que las administradoras de pensiones están en el deber de cobro a los empleadores de aquellas cotizaciones que no han sido satisfechas oportunamente, con los documentos aportados al plenario, no se logra evidenciar



que hasta el momento el trámite administrativo haya sido finalizado, por tanto, no es procedente el estudio de las pretensiones en sede judicial.

Igualmente llamó traer al asunto la jurisprudencia T 588 del 2003 y la C 1024-2004, sobre el tiempo con que cuentan las AFP para dar respuesta a las solicitudes de reconocimiento pensional, y en ese orden de ideas la generación de los intereses del art. 141 de la ley 100 de 1993 se dará posterior a este tiempo de estudio de la mencionada solicitud.

En desarrollo de dicho mandato constitucional, la Ley 100 de 1993 creó el sistema general de pensiones el cual tiene por finalidad garantizar a la población el amparo frente a las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte. Frente a la muerte, se creó la pensión de sobrevivientes y la sustitución pensional como uno de los mecanismos que, en virtud del derecho a la seguridad social, protege a las personas que dependían emocional y económicamente del afiliado o pensionado que fallece y proveía el sustento del hogar^[36], con el objeto de asegurar la atención de sus necesidades básicas.

6.2. Intereses moratorios ante el pago tardío de las mesadas pensionales

6.2.1. El Artículo 53 de la Constitución Política establece que *"el estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales"*.

6.2.2. En desarrollo de dicho postulado, el Legislador reguló la institución de los intereses moratorios en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, en los siguientes términos:

6.3. Interpretación jurisprudencial de artículo 141 de la Ley 100 de 1993

Del artículo 46 Superior se desprende un deber positivo en cabeza del Estado de dispensar un trato especial a las personas de la tercera edad. Esta obligación va dirigida al Estado, a la sociedad y a la familia, consiste en la protección y asistencia de las personas de la tercera edad, a través de la promoción de su *"integración a la vida activa y comunitaria"*.

Igualmente, la **Sentencia SU065/18**, ilustra sobre la determinación que deben obedecer los despachos con miras en acatar los precedentes judiciales que se consagran en la jurisprudencia nacional, y afirma "Mediante el recurso de casación interpuesto por el Banco Cafetero en Liquidación, la Sala de Casación Laboral casó parcialmente la decisión del Tribunal en el sentido de revocar la orden de pago de los intereses de mora, por lo que condenó al reconocimiento pensional y dispuso que esa prestación fuese indexada. Empero revocó la orden de desembolso de los intereses de mora."

La interpretación de las altas cortes en relación con la imposibilidad de conceder los intereses moratorios, se establece premisa fáctica de otorgar las mesadas que componen el retroactivo pensional debidamente indexada, y es que es claro que tanto la indexación del retroactivo como los intereses moratorios persiguen la misma finalidad, que es compensar la pérdida de valor adquisitivo del dinero.

Las sentencias SL 4338 de 2019 y la T-586-12, esta Sala observa igualmente que la sentencia C-601 de 2000, dio un alcance diferente al que pretende hacer ver la actora en la presente acción de tutela, pues esta se refirió a la temporalidad del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, es decir, que la sanción moratoria se aplica a toda clase de pensiones, reconocidas en cualquier tiempo, sin embargo, en dicha sentencia no se estableció ninguna regla que permita interpretar que los intereses moratorios de que trata el referido artículo, deban ser reconocidos en los eventos en que se trate de un reajuste pensional derivado de la indexación de la primera mesada pensional.

INTERESES MORATORIOS CUANDO REQUISITOS DE LA PRESTACIÓN NO SE PROBARON EN SEDE ADMINISTRATIVA

Sin perjuicio de los argumentos ya expuestos, debe tenerse en cuenta que en sentencia SL11897-2016 de 24 de agosto de 2016, radicación 59673, la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral dejó expresadas las razones por las que se predica la improcedencia de la sanción establecida en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 por la no acreditación de



los requisitos legales exigidos para el reconocimiento de la prestación que se debate, en los siguientes términos:

*"...No obstante lo anterior, la Sala en sentencia CSJ SL704-2013, atenuó esa posición jurisprudencial, para aquellos eventos en que las actuaciones de las administradoras de pensiones públicas o privadas, al no reconocer o pagar las prestaciones periódicas a su cargo, **encuentren plena justificación bien porque tengan respaldo normativo, ora porque su postura provenga de la aplicación minuciosa de la ley, sin los alcances o efectos que en un momento dado puedan darle los jueces en la función que les es propia de interpretar las normas sociales y ajustarlas a los postulados y objetivos fundamentales de la seguridad social, y que a las entidades que la gestionan no les compete y les es imposible predecir.***

Cuando se den tales circunstancias no resultaría razonable imponer el pago de intereses moratorios porque la conducta del obligado «no estuvo guiada por el capricho o la arbitrariedad, sino por el respeto de una normativa que de manera plausible estimaban regía el derecho en controversia».

Ahora bien, y en sintonía con lo expresado por la Corte, puede evidenciarse que la demandante no acreditó haber cumplido con los referentes normativos exigidos por Colpensiones para la radicación y posterior reconocimiento prestación económica aquí pretendida.

PRONUNCIAMIENTO EXPRESO FRENTE A LAS PRETENSIONES

A LA PRIMERA: ME OPONGO, a que se declare la nulidad absoluta del traslado efectuado al actor, del régimen de prima media con prestación definida administrado por la administradora colombiana de pensiones Colpensiones al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad administrado por la Colfondos pensiones y cesantías SA.

A LA SEGUNDA: ME OPONGO, a que se declare que el demandante siempre estuvo válidamente afiliado al instituto de seguros sociales, hoy administradora colombiana de pensiones Colpensiones, y que no se surtieron los efectos legales y jurídicos que implica el traslado del Régimen de Prima Media con Prestación definida, al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

A LA TERCERA: ME OPONGO, a que se ordene el traslado al fondo común de naturaleza pública administrado por la administradora colombiana de pensiones Colpensiones, el capital ahorrado en la cuenta individual del actor, de conformidad con las normas previstas por la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

A LA CUARTA: ME OPONGO, a que, si las entidades demandadas se oponen a la prosperidad de las pretensiones, sean condenadas al pago de las costas procesales y las agencias en derecho.

A LA QUINTA: ME OPONGO, a que se condene a las entidades demandadas a pagar al actor todo derecho prestacional o pensional que llegare a probarse en el decurso del proceso, con base en las facultades extra y ultrapetita, que le asisten al Juzgador de Instancia.

Como se aprecia en lo manifestado anteriormente, me opongo a cada una de las pretensiones principales de la demanda por considerar que no tienen fundamento legal para prosperar, por lo expuesto en las razones de hecho y de derecho y solicito desde ahora se absuelva a mi defendida, la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, de todas ellas conforme a lo que resulte probado en el presente proceso, para tal efecto propongo las siguientes **EXCEPCIONES**;

PERENTORIAS:

INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN Y COBRO DE LO NO DEBIDO:



Fundamento esta excepción en el hecho de que mi representada la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, por mandato de la ley y la jurisprudencia, no está obligada a trasladar del régimen de ahorro individual con Colfondos SA pensiones y cesantías al régimen de prima media con prestación definida administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, no puede hacer otra cosa que ajustarse plenamente a la Ley, en todas las actuaciones administrativas, y en el caso concreto se ciñó de manera rigurosa, exacta y correcta a las disposiciones constitucionales, legales y a los reglamentos de la Institución, por lo tanto, no es dable desconocer por vía de Jurisprudencia, tan claras reglas legales sobre prestaciones y obligaciones de las Entidades de seguridad social, que todos los juzgadores están obligados a acatar.

NADIE ESTA OBLIGADO A LO IMPOSIBLE – PRINCIPIO GENERAL DEL DERECHO

El hecho, de que la nulidad o ineficacia en teoría retrotraiga las cosas al estado anterior en que se encontraban al momento del acto que se refuto nulo o ineficaz, no significa que **el demandante** se pueda convertir ipso facto en afiliado del RPM, pues es una REALIDAD que estuvo vinculado en el RAIS por más de 28 años en los cuales se generaron efectos jurídicos que no desaparecen por arte de magia con la declaratoria de nulidad o ineficacia como erradamente pareciera creer **el demandante**, su apoderado y como está siendo equivocadamente convalidado en los estrados judiciales.

Conforme la narración de los hechos de la demanda, tenemos que **la demandante** haciendo uso de la autonomía que le otorgo la ley, se trasladó del RPM administrado por el ISS hoy administrado por Colpensiones al RAIS, manteniendo su afiliación activa hasta el presente año 2023.

El traslado realizado por la parte actora se motivó en supuestos engaños y falta de información que le hicieron creer que sería más beneficiosa su pensión si realizaba su traslado al RAIS, tales engaños a los afiliados, se atribuyen a las administradoras del RAIS de quienes se dice solo estaban interesadas en ganar nuevos afiliados y no en garantizar las mejores condiciones pensionales de los ciudadanos.

Finalmente, se demanda del operador judicial un análisis más riguroso de nuestra legislación y de los mecanismos jurídicos a su alcance para satisfacer las pretensiones en esta clase de demandas, pues fácil es cargar estas condenas económicas a **Colpensiones** por el hecho de ser la administradora del sistema público de seguridad social, sin detenerse a estudiar la culpa y responsabilidad respecto de los actos que se declaran nulos o ineficaces y con los cuales se ocasionaron perjuicios, el principio de sostenibilidad fiscal y financiera del Régimen de Prima Media y en igual medida el hecho que las administradoras del RAIS corresponden a empresas del sector privado con disponibilidad financiera para resarcir los perjuicios que ocasionan por sobre **Colpensiones** cuyos recursos provienen de todos los ciudadanos, quienes terminan pagando estos retroactivos a cuenta de nada pues la entidad se reitera, no tuvo ninguna injerencia, responsabilidad o culpa en todo lo que se expone en la demanda.

PRESCRIPCIÓN

Sin implicar confesión o reconocimiento de derecho alguno, propongo en esta excepción por tratarse de un derecho laboral y de seguridad social.

"CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. Artículo 488. REGLA GENERAL. Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto."

"CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO LABORAL. Artículo 151. PRESCRIPCION. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se



contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el {empleador}, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción, pero sólo por un lapso igual."

LA INNOMINADA

De conformidad con el inciso primero del artículo 282 de la LEY 1564 DE 2012 (Código General del Proceso), respetuosamente solicito al señor Juez, se sirva declarar esta excepción de oficio al momento de proferir Sentencia definitiva, frente a que toda situación de hecho o derecho que sea advertida y probada en el transcurso del proceso y que favorezca los intereses de mí representada. *"LEY 1564 DE 2012. ARTÍCULO 282. RESOLUCIÓN SOBRE EXCEPCIONES. En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda..."*

BUENA FE

Es importante resaltar que la buena fe en la labor misional de Colpensiones surge precisamente de la estricta aplicación de la Constitución, la Ley y el precedente jurisprudencial que permite conceder o negar prestaciones ajustadas a derecho, Colpensiones en este caso obró bajo el pleno convencimiento de estar actuando conforme a la Ley, teniendo en cuenta los aspectos fácticos y jurídicos aplicable para la situación particular de la parte demandante.

FRENTE A LA CONDENA EN COSTAS

Señor Juez, solicito de manera respetuosa, que de ser negadas las pretensiones y condenas y probadas las excepciones de la demanda, se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandante, a favor de la Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones, en virtud de la facultad establecida en la Ley 1564 de 2012 - Código General del Proceso, artículo 365.

En el evento de que prosperen parcialmente las excepciones propuestas y de ser el caso, en el presente escrito, solicito respetuosamente al señor (a). Juez tenga en cuenta al fallar, el Numeral 5 del art. 365 del Código de General del Proceso, que establece, *"ARTÍCULO 365: CONDENA EN COSTAS; En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia, la condenación en costas se sujetará a las siguientes reglas: (...) 5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión"*.

MEDIOS DE PRUEBA

Solicito se tengan, decreten y practiquen como medios de pruebas de las excepciones propuestas, las siguientes:

- A) EN ARCHIVO DIGITAL:** El expediente Administrativo e historia laboral de la parte actora, se enviará en el momento que Colpensiones cargue la misma.
- B) OTRAS PRUEBAS OFICIOSAS:** En ejercicio de lo dispuesto por el Código Procesal del Trabajo, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 167 del Código General del Proceso, se solicita al Honorable Juez oficiar a Colfondos SA pensiones y cesantías para que allegue las siguientes pruebas: **i)** Certificación en relación con la calidad de pensionado o no de la demandante, **ii)** Certificación de las operaciones y/o contratos financieros suscritos o ejecutados con terceros para consolidar el soporte de la pensión del demandante y **iii)** Certificación y/o soportes atinentes al trámite de emisión y de bonos pensionales a que tuviere derecho la demandante. Lo anterior, como quiera que



Colfondos SA pensiones y cesantías se encuentra en mejor posición para allegar las pruebas requeridas por su cercanía con las mismas.

- C) OTRAS PRUEBAS OFICIOSAS:** Las demás que la señora Juez en uso de las facultades legales considere decretar para obtener la certeza jurídica suficiente al momento de proferir Sentencia.

SOLICITUD ESPECIAL

Se insta del despacho a solicitar a Asofondos el detalle del historial laboral de la actora en lo relacionado con los traslados realizados a lo largo de su vida laboral, dado la inconsistencia y falta de material probatorio para los periodos de tiempos comprendidos desde el año de 1994 hasta el año de 1997.

SOLICITUD CONDENA EN COSTAS

Solicito al Señor Juez, en nombre de Colpensiones, que de ser negadas las pretensiones y condenas y probadas las excepciones de la demanda, la parte actora sea condenada al pago de las costas y agencias en derecho a favor de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones conforme a lo establecido en el artículo 365 del Código General del Proceso.

Además de lo anterior, en el evento de prosperar parcialmente las excepciones propuestas solicito respetuosamente al señor Juez tenga en cuenta al fallar, el numeral 5° del artículo 365 del Código General del Proceso, el cual expresa:

"En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión".

NOTIFICACIONES

El suscrito recibirá notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en la Calle 5 Norte No. 1N - 95 Tel: 8889161-64 de Cali y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 2213 del 2022, manifiesto que el canal digital a través del cual recibiré notificaciones es: notificacionssl@mejiayasociadosabogados.com

De Usted señor Juez, respetuosamente;

LEONARDO DELGADO VALENCIA
C.C. No. 1.130.682.291 de Cali
T.P. No. 233.481 del C.S.J.

ELAB/LDV

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.130.682.291**

APELLIDOS
DELGADO VALENCIA

NOMBRES
LEONARDO

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-ABR-1989**

CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 **A+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

06-JUN-2007 CALI


FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-3100100-00078123-M-1130682291-20080925 0003692161A 1 25181959

SECRETARIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL


Consejo Superior
de la Judicatura


REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO

NOMBRES:
LEONARDO

PRESENTE CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA
PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO

APELLIDOS:
DELGADO VALENCIA



UNIVERSIDAD
SANTIAGO DE CALI

FECHA DE GRADO
01 ago 2013

CONSEJO SECCIONAL
VALLE

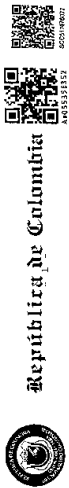
CÉDULA
1.130.682.291

FECHA DE EXPEDICION
12 sep 2013

TARJETA N°
233481

**ESTA TARJETA ES DOCUMENTO PUBLICO
Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA
LEY 270 DE 1996, EL DECRETO 196 DE 1971
Y EL ACUERDO 180 DE 1996.**

**SI ESTA TARJETA ES ENCONTRADA, POR
FAVOR, ENVIARLA AL CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE REGISTRO
NACIONAL DE ABOGADOS.**



República de Colombia

NOTARIA NOVENA (9) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 3.373

TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES

FECHA DE OTORGAMIENTO: 02 DE SEPTIEMBRE

DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2.019).

NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO

ESPECIFICACIÓN

VALOR ACTO

SIN CUANTÍA

POTER GENERAL

IDENTIFICACIÓN

PERSONAS QUE INTERVIENEN

PODERANTE:

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - Colpensiones

APOTECADO:

MEJIA Y ASOCIADOS ABOGADOS ESPECIALIZADOS S.A.S. NIT. 805.017.300-1

En Bogotá, Distrito Capital, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, a los DOS (2) DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019), ante el Despacho de la NOTARIA NOVENA (9) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C., cuya Notaría tiene en la Doctora ELSA VILLALOBOS SARMIENTO, se otorgó escritura pública que se consigna en los siguientes términos:

COMPARECERON CON MINUTA ESCRITA Y ENVIADA:

Compareció el Doctor JAVIER EDUARDO GUZMÁN SILVA, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, identificado con cédula de ciudadanía número 78.333.752 expedida en Bogotá, con domicilio y residencia en Bogotá, en su condición de Representante Legal Suplente de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - Colpensiones EICE, con NIT. 800.336.004-7, calidad que acredita el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por el Registrador de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá.

Después, notarial para una escritura en la escritura pública. - Sin tener en cuenta para el presente

El notario responde de la regularidad formal del instrumento que autoriza, zero no de la veracidad de las declaraciones de las partes, zero de la capacidad o aptitud legal de éstas para celebrar el acto o contrato respectivo. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 9º del Decreto Ley 960 de 1970.

BASES DE DATOS

De acuerdo a lo previsto en la Ley 1581 de 2012 Regístran General de Protección de Datos Personales y en el Decreto 1377 de 2013 se informa a los comparecientes que dentro del proceso de seguridad adoptado por esta Notaría, se ha implementado la toma de huellas e imagen digital de los comparecientes a través del sistema biométrico que se recoge por parte de la Notaría al momento del otorgamiento del presente instrumento, previa manifestación expresa de la voluntad de aceptación por parte de los comparecientes, conociendo que dicho sistema de control implementado por la Notaría tiene por objeto prevenir posibles suplantaciones, salvaguardar los instrumentos y la eficacia de los negocios jurídicos celebrados.

El Notario advierte a los comparecientes:

1) Que las declaraciones emitidas por ellos deben obedecer a la verdad

2) Que son responsables penal y civilmente en el evento en que se utilice este instrumento con fines fraudulentos o ilegales.

3) Que es obligación de los comparecientes leer y verificar cuidadosamente el contenido del presente instrumento, los nombres completos, los documentos de identificación, los números de la matrícula inmobiliaria, cédula catastral, indicios y demás datos consignados en este instrumento, --

Corro consecuencia de esta advertencia a el Notario Notaría cede constancia que

Después, notarial para una escritura en la escritura pública. - Sin tener en cuenta para el presente

Después, notarial para una escritura en la escritura pública. - Sin tener en cuenta para el presente

Después, notarial para una escritura en la escritura pública. - Sin tener en cuenta para el presente

Después, notarial para una escritura en la escritura pública. - Sin tener en cuenta para el presente

Después, notarial para una escritura en la escritura pública. - Sin tener en cuenta para el presente

Después, notarial para una escritura en la escritura pública. - Sin tener en cuenta para el presente

Después, notarial para una escritura en la escritura pública. - Sin tener en cuenta para el presente

Después, notarial para una escritura en la escritura pública. - Sin tener en cuenta para el presente

Después, notarial para una escritura en la escritura pública. - Sin tener en cuenta para el presente

Después, notarial para una escritura en la escritura pública. - Sin tener en cuenta para el presente

Después, notarial para una escritura en la escritura pública. - Sin tener en cuenta para el presente

Después, notarial para una escritura en la escritura pública. - Sin tener en cuenta para el presente

Después, notarial para una escritura en la escritura pública. - Sin tener en cuenta para el presente

Después, notarial para una escritura en la escritura pública. - Sin tener en cuenta para el presente

Después, notarial para una escritura en la escritura pública. - Sin tener en cuenta para el presente

Después, notarial para una escritura en la escritura pública. - Sin tener en cuenta para el presente

Después, notarial para una escritura en la escritura pública. - Sin tener en cuenta para el presente

Después, notarial para una escritura en la escritura pública. - Sin tener en cuenta para el presente

Después, notarial para una escritura en la escritura pública. - Sin tener en cuenta para el presente

Después, notarial para una escritura en la escritura pública. - Sin tener en cuenta para el presente

Después, notarial para una escritura en la escritura pública. - Sin tener en cuenta para el presente

Después, notarial para una escritura en la escritura pública. - Sin tener en cuenta para el presente

Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición: 27 de Agosto de 2015 09:31 AM
CONSTITUCION
REINFORMAS ESPECIALES
TERMINO DE DURACION
OBJETO SOCIAL

Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición: 27 de Agosto de 2015 09:31 AM
NOMBRE IDENTIFICACION DOMICILIO
UBICACION
MANTENIMIENTO

Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición: 27 de Agosto de 2015 09:31 AM
RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCION
REFORMAS DE ESTATUTOS

Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición: 27 de Agosto de 2015 09:31 AM
REPRESENTACION LEGAL
REPRESENTANTES LEGALES

Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición: 27 de Agosto de 2015 09:31 AM
REPRESENTANTES LEGALES
REPRESENTANTES LEGALES

Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición: 27 de Agosto de 2015 09:31 AM
REPRESENTANTES LEGALES
REPRESENTANTES LEGALES

CERTIFICADO NUMERO 297-2019
COMO NOTARIA NOVENA (9ª) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICADO:

Que por medio de la escritura pública número TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES (3.373) de fecha DOS (02) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019) otorgada en esta Notaría, compareció ella) señorial) JAVIER EDUARDO GUZMAN SILVA, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.333.752 de Bogotá, en su condición de Representante Legal Suplente de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – Colpensiones EICE, con el PODER GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE, a la sociedad RELAJA Y ASOCIADOS ABOGADOS ESPECIALIZADOS S.A.S., para que en su nombre y representación, celebre y otorgue las facultades y atribuciones allí consignadas.

Además CERTIFICO que a la fecha el PODER anterior se presume vigente, por cuanto en su original o escritura matriz NO aparece nada que indique haber sido reformado o revocado para el día de hoy.

Esta certificación de vigencia de poder NO sustituye la presentación física de la escritura pública que se contiene el poder.

Este certificado se expide con destino al INTERESADO
Bogotá D.C., Dos (02) de Septiembre de dos mil diecinueve (2019).
Encomendado en el día.

ELSA VILLALOBOS SARMIENTO
NOTARIA NOVENA (9ª) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.

NOTARIA NOVENA (9ª) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.

NOTARIA 9 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ

ELSA VILLALOBOS SARMIENTO

NOTARIA NOVENA (9ª) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ D.C., DOS (02) DE SEPTIEMBRE DE 2019.

ES PRIMERA (1ª) COPIA DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 3.373 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019, TOMADA DE SU ORIGINAL QUE SE EXPIDE EN DIEZ (10) HOJAS DEBIDAMENTE RUBRICADAS EN SUS MARGENES, CONFORME AL ARTÍCULO 79 DEL DECRETO 960 DE 1970.

CON DESTINO A: LOS INTERESADOS.

SE EXPIDE EN BOGOTÁ D.C., a los 02 de Septiembre de 2019.

ELSA VILLALOBOS SARMIENTO

NOTARIA NOVENA (9ª) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ D.C., DOS (02) DE SEPTIEMBRE DE 2019.



NOTARIA
Bogotá D.C.



ELSA VILLALOBOS SARMIENTO
Notaria

CERTIFIADO NÚMERO 508-2023

COMO NOTARIA NOVENA (9) (E) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICO:

Que por medio de la escritura pública número **TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES (3.373)** de fecha **DOS (02) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2.019)** otorgada en esta Notaría, compareció el(la) señor(a) **JAVIER EDUARDO GUZMAN SILVA**, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número **79.333.752** de Bogotá, en su condición de Representante Legal Suplente de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – Colpensiones EICE con NIT 900.336.004-7**, confirió **PODER GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE**, a la sociedad **MEJÍA Y ASOCIADOS ABOGADOS ESPECIALIZADOS S.A.S. con NIT 805.017.300-1**, para que en su nombre y representación, celebre y ejecute las facultades y atribuciones allí consignadas.

Además **CERTIFICO** que a la fecha el **PODER** anterior se presume vigente, por cuanto en su original o escritura matriz **NO** aparece nota alguna que indique haber sido reformado o revocado parcial o totalmente.

Esta certificación de vigencia de poder **NO** sustituye la presentación física de la escritura pública que contiene el poder

Este certificado se expide con destino al **INTERESADO**

Bogotá D.C., Veintinueve (29) de Julio de Dos Mil Veintitrés (2.023)

Elaborado por: Cesar Angel


Sandra Jasmith Duarte Guerrero
Notaria Novena (9) del Círculo de Bogotá D. C. Encargada

SANDRA JASMITH DUARTE GUERRERO

NOTARIA NOVENA (9) ENCARGADA DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

NOTA: CUALQUIER CAMBIO O MODIFICACION QUE SE REALICE SOBRE ESTAS COPIAS ES ILEGAL
Y UTILIZARLAS ASI ES UN DELITO QUE CAUSA SANCION PENAL.

Avenida Carrera 20 No. 81-24 - PBX 7049839

Celular No. 318-8831698 - Email: notaria9bogotá@gmail.com
BOGOTA D.C.